

4 AVANCES de actualidad

ORIENTACION NECESARIA

Indicios dispersos y algunos hechos recientes están confirmando lo que se palpa como un sentimiento generalizado en amplios sectores democráticos, cual es la inexistencia de claras orientaciones sobre el quehacer del cuerpo social que constituye el apoyo más directo y comprometido con los cambios democratizadores esperados en todo el país tras la instauración del gobierno de Patricio Aylwin. Se trata de una suerte de hiato entre las "direcciones" -en el gobierno y en los partidos- y la masa de gente cuyas expectativas están depositadas en las iniciativas del nuevo equipo gubernamental. En términos simples y corrientes: falta conducción hacia el conjunto popular.

Señalaremos sólo algunos sucesos reveladores de una riesgosa despreocupación por las responsabilidades que corresponden a los diversos actores políticos y a los movimientos sociales.

La visita de Pinochet al Congreso, y sobre todo las insólitas demostraciones de los parlamentarios de la Concertación pujando por registrarse junto al dictador, generó naturales reacciones de reprobación pública como de dirigentes y no pocos parlamentarios del PDC, socialistas y del PPD. La gente, sencillamente, no entendió aquello.

Tampoco tuvo general aprobación la forma unilateral con que el Ministro de Hacienda llegó a acuerdo con Renovación Nacional sobre la reforma tributaria, sin entregar previa o por lo menos simultánea información sobre lo que estaba negociando a las bancadas parlamentarias que son la fuerza legislativa "propia" del gobierno de Patricio Aylwin.

Y aunque resulte paradójal, resulta igualmente poco comprensible que la dirigencia de la CUT -que ha puesto justo énfasis en la autonomía política del organismo y hecho públicas sus discrepancias con aspectos importantes del proyecto de tributación del gobierno-, haya sido tan parca en ilustrar a los trabajadores sobre los términos en que estaba negociando el

Serie de dibujos de ENEKO

AVANCES DE ACTUALIDAD

Nº 4

Abril de 1990

Santiago - Chile

EQUIPO EDITOR

Guaraní Pereda (Director)

Oswaldo Puccio

Antonio Cortés

Ernesto Aguila

Andrés Signorelli

Correspondencia a:

AVANCES DE ACTUALIDAD

Simón Bolívar 1846

Santiago - Nuñoa

CHILE

Teléfono 461731

"acuerdo marco" con la Confederación de la Producción y del Comercio.

Es difícil concordar también con las declaraciones del Ministro de Defensa acerca de supuestas exageraciones de los periodistas en torno a las responsabilidades de miembros de las FF.AA. en la violación de los Derechos Humanos durante la dictadura. Un juicio que mereció la pronta réplica del Colegio de Periodistas, a la que siguió otra inesperada aclaración del Ministro Secretario General de Gobierno -promotor del proyecto de ley que levanta las restricciones a la libertad de prensa aún vigentes-, que se pareció demasiado a la costumbre del régimen pasado de "poner nota" a la actuación de los periodistas.

Estos hechos, y muchos otros, son malas señales, que producen confusión. Tras ellos se percibe una inadecuada comprensión de los espacios y roles que caben a las instancias políticas, a las autoridades de gobierno y a las organizaciones sociales frente a la comunidad nacional en el complejo proceso de reconstrucción democrática.

A menos de dos meses de instalado el gobierno democrático ello no es grave, y aún resultan comprensibles muchos desajustes en la actuación de las jerarquías gubernativas y partidistas si consideramos el largo paréntesis en que el régimen autoritario suprimió toda forma de ejercicio democrático, tanto en la sociedad civil como en las instituciones estatales. Sin embargo, el acostumbramiento o la insensibilidad ante la falta de hábitos para una buena gestión democrática podría devenir en una tendencia hacia la generación de conflictos innecesarios y más graves de lo que el propio proceso democratizador se encuentra en condiciones de resistir sin que se pierda el control de los mismos.

A pocos puede caber dudas que en su propósito de reconquistar el poder, la derecha contempla precisamente el desarrollo de una situación conflictiva como la señalada. Apuesta, aunque no lo aparente, a los desbordes. Y éstos se producirán a grados inconvenientes si no se crean y respetan los escenarios propios para el ejercicio de la conducción y de la discrepancia.

Las señales contradictorias potencian la confusión en amplios sectores nacionales, en particular en los populares, que se encuentran sin ideas y consignas claras sobre el rumbo y las metas en torno a las cuales volcar sus energías diarias. Para suplir tales fallas resulta absolutamente insuficiente decir "así me gusta Chile".

La reflexión realizada por el Equipo Editor de AVANCES de Actualidad, que incluimos en este número, busca definir las áreas de operación y los roles singulares que deben asumir las fuerzas sociales y políticas, en especial las socialistas, en el actual cuadro político del país.

EL SOCIALISMO EN EL GOBIERNO Y EL SOCIALISMO

FRENTE AL

GOBIERNO

Que el socialismo forme parte hoy del gobierno es un dato más que relevante desde una óptica histórica.

A diferencia de los primeros tiempos de la dictadura, en los últimos años las mayores acciones punitivas no se dirigieron contra el socialismo sino contra otras fuerzas de la izquierda.

No obstante, en el plano político-ideológico, el autoritarismo constantemente destinó sus acciones al menoscabo del socialismo. Quizás si lo más indicativo sea el hecho que el artículo 8º de la Constitución de Pinochet cobrara una sola víctima: el actual Presidente del Partido Socialista.

Con el mismo norte se manejó la propaganda oficial contra el gobierno de la Unidad Popular. La majadera difamación que se hizo de ese período pretendía afectar, por cierto, a todo el arco gobernante, pero dada la militancia de Allende y la de los personeros más identificados con el proceso UP, es obvio que se esperaba un efecto más nefasto para el socialismo.

Aún más: el cinismo de la derecha y del autoritarismo llegó al extremo de calificar como "socialista" todo el pasado que se inaugura a finales

de los años 30, hasta el 73, responsabilizándolo de cuanto la era hereda la sociedad nacional.

Si esto ha sido así es porque el conservadurismo criollo percibió tempranamente **la voluntad gubernamental realista** y, por ende, **la posibilidad gubernamental efectiva** del socialismo chileno.

Planteado en términos más generales: para una derecha medianamente lúcida no es un problema mayor la existencia de una izquierda incluso con ciertos grados de desarrollo y solidez; incluso regímenes francamente autoritarios pueden dar márgenes de tolerancia para fuerzas de izquierda; son concesiones que no siempre ni necesariamente tienen que ver con anuencias de parte de las izquierdas para con el sistema imperante. La clave para la derecha es que estas fuerzas se mantengan en un plano contestatario, como simple proyección de situaciones corporativas y sin expresión, ni prestigio, ni cultura gubernamental. O sea, que no sean **socialmente competitivas** desde la lógica del poder.

Retrotraer al socialismo a esa condición contestataria, exponerlo frente a la luz pública como un movimiento incapaz de enfrentar idóneamente la "cosa pública", fueron los propósitos de la derecha y la dictadura y para lo cual amalgamaron represión, propaganda, medidas políticas y de inteligencia. Y no era ésta una finalidad irracionalmente concebida. La derecha presupone contar cuando menos con dos factores a su haber. De una parte, la crisis de 1973 cuya culpabilidad, merced a la propaganda, recaería en el gobierno socialista y sus funcionarios. Y, de otra, la inmensa masa juvenil que compone la estructura social y ciudadana y que tendría que resultar altamente sensible a la "historia oficial". En suma, la estrategia derechista consistía en crear la imagen de un socialismo y una izquierda testimonial y que auto-eliminara su vocación realista de gobierno.

La presencia del socialismo en el gobierno posee esa primerísima connotación: la soberanía popular lo volvió a juzgar idóneo y legítimo para participar en la conducción del Estado-nación. El socialismo chileno continúa siendo -a pesar de los tiempos que corren en el mundo- una figura de dirección gubernamental popularmente aceptada.

Y ese logro, relevante si se le mide sólo por los 16 años de oscurantismo político, lo es tanto más si se observa la crisis del "socialismo real".

PROGRAMA DE GOBIERNO Y SOCIALISMO

Algunas voces han expresado o insinuado que este regreso del socialismo al gobierno se debe al abandono o desperfilamiento de su condición de corriente de izquierda. Que las alianzas y el apoyo obtenido dentro de ella habría sido factible por su pérdida de radicalidad y por su renuencia a ser una opción revolucionaria.

Es cierto que el socialismo políticamente más tangible ha roto categóricamente con toda fórmula revolucionarista. Pero sólo desde ópticas muy anquilosadas y formalistas pueden plantearse dudas acerca de la ubicación del socialismo en la izquierda y acerca de su vocación transformadora de la realidad capitalista.

Sería lato, y además aburrido, insistir en la polémica acerca de qué y quién determina la ubicación de una organización política con estos parámetros

casi geométricos y cada vez más vaciados de contenido. Y menos aún cuando infinidad de experiencias de la vida moderna demuestran que una misma organización o posición política puede ser, paradójicamente, revolucionaria en unos aspectos y conservadora en otros.

Para los efectos de la política concreta importa menos el carácter con que se autodefine -o que se le asigna- un partido o movimiento e importa más la actividad política específica que éstos desarrollan en las contingencias.

Ser izquierda, revolucionario o progresista es un rango que se delimita, entonces, en cada contexto político y por las formas de hacer política articulando el ahora con el eslabón siguiente de la larga cadena que precede a la realización de un proyecto social.

El programa de gobierno suscrito por el socialismo no es un programa revolucionario, si por tal se entiende el que se plantea cambios sustanciales, y en breve plazo, de todas las estructuras que definen un orden social. Sin embargo, la ejecución de ese programa es consustancial al socialismo como fuerza y proyecto de izquierda para el aquí y el ahora, o sea, habida cuenta del escenario en el que se desenvuelven los conflictos.

REVOLUCION EN LAS REFORMAS

Alguna tradición ideologizada de la izquierda razonó como antagonica la relación

entre reformas y revolución. Hoy en el socialismo, y también en otras izquierdas, esa tesis ha sido descartada (por lo demás nunca fue un pensamiento que orientara en los hechos a todo el socialismo). Sin embargo, el vínculo entre ambos momentos no se termina de comprender a cabalidad. Y es natural que así ocurra puesto que la propia categoría de "revolución", por iniciativa de la realidad, se encuentra interrogada.

En lo que sí parece haber una aproximación consensual es que la revolución, la transformación cualitativa, en el caso chileno no puede ser pensada como resultado de una situación apocalíptica, o de un estado catastrófico desde el cual la sociedad y el poder pueden ser "sorprendidos" y "capturados". La idea que tiende a imponerse es que el cambio social no puede ser sino la coronación de un proceso de reformas, cada una de las cuales es un momento de la transformación y, a la vez, un momento que hace objetivos y sociabiliza la posibilidad de nuevos cambios, hasta el punto en que la revolución como tal, o sea, como transformación cualitativa y constructiva de un nuevo orden social, se convierte en un paso necesario y factible. La revolución deviene así en una suerte de acto connatural a la realidad social, cultural y política del pueblo-nación cuyo proceso ha involucrado activamente a la sociedad popular y cuya culminación no puede ser pre-establecida ni caracterizada apriorísticamente.

Las iniciativas propuestas

por el programa de la Concertación y que deberán ser cumplidas por el gobierno democrático, ofrecen hoy el campo posible para las reformas requeridas por el socialismo para los efectos de generar una dinámica colectivamente progresista. Por cierto que tales reformas serán tanto más eficientes, en el sentido deseado, en cuanto más sea el énfasis político-cultural socialista que a ellas se les ponga.

DEMOCRATIZAR: LA GRAN TAREA SOCIALISTA

Insistir en la democratización como finalidad sustantiva del socialismo para el período gubernamental en curso, puede parecer perogrullada y una forma de soslayar la infinidad de otros problemas que enfrenta el universo popular. Y, efectivamente, tal fórmula podría devenir en un ejercicio retórico con escasas implicancias si la democratización no es definida ni

realizada a la luz de una visión progresista. La democracia, como concepto y objetivo, es una categoría totalizadora. Es decir, no es un agregado o una simple derivación de un postulado teórico-político superior. Por el contrario, la noción de democracia sintetiza, al nivel de la realidad política, las concepciones globales que poseen las diversas corrientes que compiten por la dirección de la sociedad. De allí que precisar la idea propia acerca de la democracia es una precondition para hacer una política congruente al proyecto socialista.

Tan riesgoso como una indefinición frente al tema de la democracia es el suponer, por un lado, que el concepto socialista de democracia es siempre y enteramente antagónico al que proviene desde otras vertientes y, por otro lado, que la idea democrática es inmutable, ajena a la enseñanza histórica.

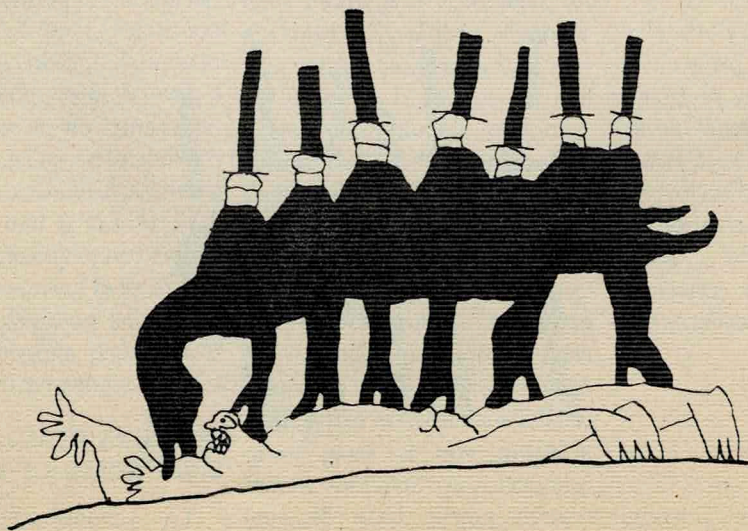
La democracia se lee de diversas maneras, pero -junto a la idea de libertad- es uno de los

conceptos que ha ido siendo acotado por la historia de la humanidad, de suerte que tiene un espacio de lectura común, compartido por un colectivo mayoritario. En la actualidad, por ejemplo, el sufragio universal es una condición, entre otras, reconocida por toda filosofía que razona la democracia.

Con estos recaudos y sin intentar agotar aquí un tema tan amplio como lo es el de la democracia en la teoría socialista, nos interesa abordar algunos puntos específicos en cuanto a la presente tarea democratizadora.

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA

Desterrar las instituciones autoritarias legadas por la dictadura es de una prioridad obvia. Sin embargo, el proceso democratizador involucra otras medidas y de mayor complejidad. Una de ellas es definir el mecanismo institucional que



ha de suplir tales herencias. Y otra, de suma importancia, es convenir en qué recursos institucionales debieran ponerse en debate en la doble mira de expandir la democracia y de asegurar su estabilidad y reproducción.

Por cierto que aquí no cabe más que anticipar algunos criterios ordenadores.

En primer lugar, una democracia progresista debe tender hacia un creciente sometimiento a la soberanía nacional de las instituciones estatales, cuando menos de las más significativas para la vida nacional.

En segundo lugar, si bien hoy por hoy es inimaginable una democracia que no opere sobre la base de la representación, o sea a través de la delegación del poder colectivo en determinadas instancias, sí es factible reflexionar acerca de sistemas que acorten las brechas entre representantes y representados, esto es, que impida que el poder delegado se autonomice a grados que le impliquen dejar de ser representativos.

En tercer lugar, y articulado a lo anterior, el progresismo democrático debe propender hacia una institucionalidad que facilite la existencia de instancias sociales con atribuciones de auto-gobierno o de co-gobierno, particularmente en aquellas esferas donde las relaciones sociales son más fluidas y cotidianas.

DEMOCRACIA Y CONSENSOS

El criterio de gobernar

esforzándose por buscar consensos políticos es un criterio más que atendible, considerando la fase de refundación democrática que se vive. Pero no sólo por ello. En realidad ese tipo de política de concertación está recomendada por las recientes exigencias nacionales y latinoamericanas y por cierto "sentido común" casi universal.

Pero esto representa algunos peligros si no se atiende con cuidado la relación entre consenso y democracia. Peligros que no dicen relación sólo con la posibilidad de que los acuerdos consensuales -o algunos de ellos en ciertos momentos- sean desventajosos para los intereses perseguidos por las fuerzas gubernamentales. En realidad esos son peligros menores, casi anecdóticos y, además, intrínsecos a la política como actividad democrática. Lo preocupante proviene cuando los consensos pueden mermar la esencialidad democrática.

Una situación de esa naturaleza se crea en la medida que los acuerdos adquieren una dinámica propia y concentrada en los aparatos estatales y aparato-partidos. A tal fenómeno lo llamaríamos **lógica "estadolátrica"**. Los consensos así practicados pueden derivar en una **indiferencia social** respecto del acontecer general y de la democracia en particular. Y, extremando la hipótesis, en una crisis de representación, esto es, en una pérdida de representatividad social de las estructuras políticas, con la cual, naturalmente, el sistema democrático pierde base de sus-

tentación social efectiva.

Un segundo aspecto riesgoso se plantea en términos de la eficacia de los consensos obtenidos con ese enfoque "estadolátrico" (cupular estatal y partidista). Si, por un lado, los acuerdos involucran a agentes sociales significativos y activos y, por otro, si éstos no han participado en la construcción del consenso sino a través de supuestas estructuras políticas representativas de sus intereses, nada asegura la realización efectiva de los acuerdos, salvo por vía coercitiva y, por ende, con **costos para la democracia.**

Una adecuada política de consensos debería sujetarse, cuando menos, a dos ideas fuerza. De un lado, a que las formas para alcanzar acuerdos y los acuerdos mismos no aparezcan contrarios o lesionando la convocatoria democratizadora, es decir, que no debiliten el llamado a la reactivación y participación comunitaria; y de otro lado, a que los inevitables consensos a lograr en la esfera puramente política intenten conciliar siempre, y en los máximos grados posibles, la lógica política con la lógica imperante en la realidad del movimiento social. En otras palabras, la política de acuerdos debe tender a una correspondencia con lo que efectivamente ocurre en el universo social. **Los consensos políticos, en definitiva, deben reproducir dinámicas sociales reales.**

CULTURA DEMOCRÁTICA Y SOCIEDAD CIVIL

La reconstrucción demo-

crática con miras a su perfeccionamiento no será posible o conllevará tiempos y esfuerzos mayores si no se recrea y profundiza una cultura democrática enraizada en la sociedad y, en especial, en la sociedad popular.

Ahora bien, culturizar en ese sentido **no consiste sólo en la transmisión de ideas**, ni es una cuestión que atañe exclusivamente al área propagandística, al mensaje ideológico, como tiende a pensarse con harta frecuencia cuando se trata el tema cultural.

Una cultura popular "orgánica", es decir, internalizada como sentido común, se construye principalmente a través de prácticas ejecutadas por el sujeto popular y también por medio de la observación que el sujeto popular hace de otras prácticas, o sea del "buen ejemplo".

Esto implica, para el gobernante socialista, un estilo particular de hacer política, que no se restringe únicamente al uso del diálogo y al respeto por las

opiniones de los gobernados. Se extiende a la **entrega de la información** de las variantes que operan en la toma de decisiones, de suerte de hacerlas, si no siempre aceptables, comprensibles para el ciudadano; y se extiende también al **estímulo permanente al desarrollo de instancias sociales** con capacidad de representación y autogestión.

Para el socialismo en general, la culturización democrática obliga a un esfuerzo por difundir en la sociedad civil formas de organización y sistemas de relaciones bajo verdadero imperio de prácticas democráticas, entendiendo por ellas no sólo la elección de autoridades sino también la **participación colectiva en las tareas del poder y de gestión en los espacios comunitarios**.

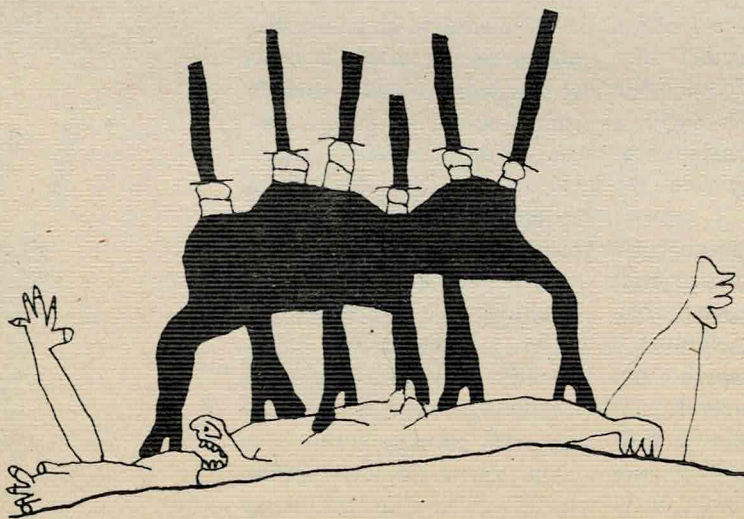
DEMOCRACIA Y PROBLEMAS SOCIALES

El vínculo entre democracia y solución de las demandas

sociales es otro de los tópicos que hoy aparecen enrarecidos. Tiende a predominar la noción de que la democracia no siempre coincide o, lisa y llanamente, se opone a las decisiones técnicas requeridas para la satisfacción de las reivindicaciones colectivas. Es decir, no se le concede a la democracia la cualidad de recurso eficiente para la administración de toda la problemática social.

En esta apreciación se entrelazan pensamientos conservadores o neo-liberales con pensamientos de origen izquierdista. Ambos, por ejemplo, relacionan estabilidad democrática con determinados índices de bienestar económico, los cuales dependerían de factores técnicos "neutros", distantes y distintos a la razón de ser democrática.

En el fondo de tal razonamiento -esencialmente burgués- está el equívoco de ver la democracia relacionada a la economía en sus aspectos exclusivamente distributivos. Y tan es



así que cuando se supone que la economía no soporta juegos redistributivos, entonces se justificaría la suspensión de la democracia.

Con esta óptica se puede ser demócrata -feble, por cierto-, pero con una concepción estática, formal y corporativa de la democracia. Una "democracia limitada" pero ya no por un poder militar más o menos autónomo sino por la (supuestamente) intrínseca incapacidad de la democracia para ser eficiente.

En la filosofía socialista, la **democracia puede y debe ser un mecanismo idóneo para la administración global de la sociedad.**

Pero ello significa, primero, reconocer que lo técnico no es unívoco, es decir que la técnica también está sujeta a opciones y que **determinado instrumental democrático sirve mejor a los fines de optar eficientemente.**

Significa, luego, aceptar que la democracia debe comprometer activamente a los colectivos en las medidas adoptadas, y que por ende incorpora a la acción el elemento **voluntariedad** que, hoy por hoy, es un componente cada vez más necesario e intrínseco a las funciones de **organización y conducción social.**

Y significa, por último, agregar mayor creatividad y pujanza social a la solución de problemas acuciantes que, en muchos casos, no han sido resueltos por frivolidad gubernamental y por displicencia del colectivo. Este **desplazamiento de funciones ejecutivas hacia esferas de la**

sociedad civil, además de ser un recurso "técnico" constituye una **fuerza insuperable de culturización democrática**, tanto por el compromiso participativo que implica como por la auto-capacitación de los gobernados en gestiones del poder.

EL SOCIALISMO FRENTE AL GOBIERNO DEMOCRATICO

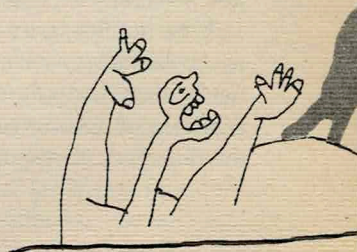
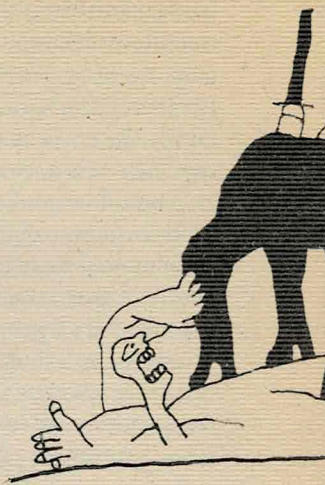
La actitud de un partido frente a un gobierno en el que participa no es un problema de fácil manejo, máxime tratándose de un gobierno de coalición.

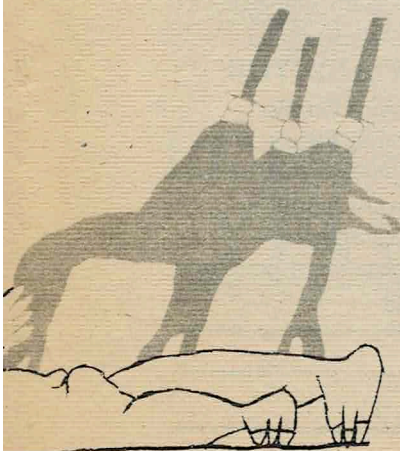
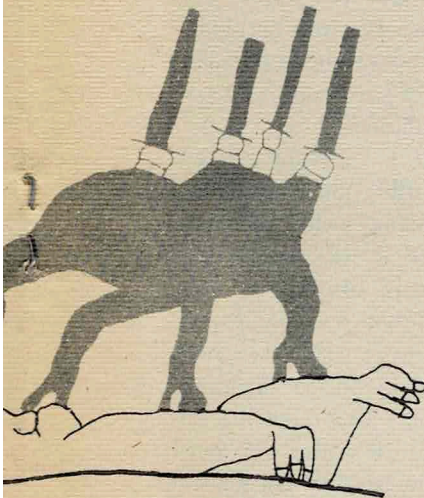
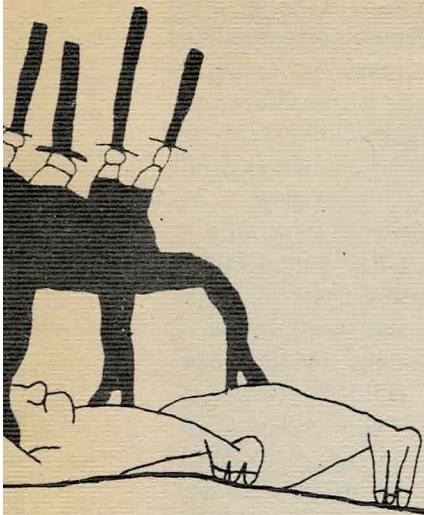
Sin embargo, hay experiencias que, cuando menos, muestran lo que no puede ocurrir. La más dramática y aleccionadora es la relación establecida por el Partido Socialista con el gobierno de Salvador Allende. La dicotomía de **ser partido del gobierno o virtual opositor**, más que paradoja o error fue una insensatez.

Por otra parte, de las muchas enseñanzas que arroja la crisis del "socialismo real", una de primer orden es la que demuestra los resultados catastróficos a los que lleva el no **distinguir entre partido, gobierno y Estado.**

Es de toda obviedad que **por su naturaleza y funciones, gobierno y partido son instituciones distintas**, y que tal diversidad persiste en el caso de un partido en el gobierno.

Un primer elemento distintivo se refiere a las esferas en





que se desenvuelven ambas instancias. El gobierno opera en y desde la sociedad política, o sea, como parte del Estado-nación. Por consiguiente, está subordinado a una institucionalidad que marca rígidamente los límites de su poder y que está concebida para resguardar el "interés nacional", definida histórica y políticamente por factores que no siempre ni todos están bajo control gubernamental.

Los partidos, en cambio, pueden y deben actuar también en y desde la sociedad civil, es decir, en el plano directo de la ciudadanía y de las relaciones sociales inmediatas. Y si bien la sociedad civil también está sometida a determinada institucionalidad, tiene un marco más flexible que permite la defensa y el desarrollo de los intereses sectoriales. Incluso en este nivel existe una enormidad de áreas no reguladas por leyes específicas y que intervienen o pueden intervenir en las relaciones políticas.

Un segundo elemento importante de diferenciación radica en el carácter y alcance de los proyectos. **Un gobierno no puede -sin salirse de la legitimidad política- realizar otro programa que no sea el que la mayoría ciudadana ha definido a través del sufragio**, condicionado, además, por la fuerza y actitud que asumen los otros poderes del Estado. (Dicho programa puede modificarse, pero su eventual reformulación requerirá de alguna forma de aceptación y apoyo ciudadano, que de no lograrse cuestionará

la legitimidad del accionar político del gobierno).

Un partido en el gobierno, por su parte, está en situación más compleja ante la cuestión programática. Obviamente que, en tanto gobierno, está forzado a respetar el programa gubernamental, pero, en tanto partido, su proyecto no se agota allí, y por lo mismo tiene el derecho a sostener no sólo la difusión de su programa histórico, de sus propósitos estratégicos, sino también a actuar en función de este último dentro de lo que le permita el compromiso con el programa de gobierno.

En términos precisos esto se traduce, al menos, en tres mecanismos de acción posibles.

Por un lado, enfatizando los aspectos programáticos inmediatos que más se condicen con el proyecto genérico. Por otro, activando medidas sobre puntos no contemplados en el plan gubernamental que no afectan la esencia del mismo. Y, por último, pugnando porque las formas de realización del programa se acerquen a los estilos políticos y propósitos de sus concepciones generales.

En el contexto actual y para la realidad socialista, es imprescindible asumir y aceptar que entre partido y gobierno, además de existir las distinciones señaladas, **habrán de existir necesariamente momentos conflictivos**. Y ésto no sólo por tratarse de un gobierno de coalición sino, insistimos, por la diversa naturaleza y funcionalidad de ambos. Ahora bien, esa **conflictividad no puede ser vista con temor ni como ajena a**

la conveniencia política. Por el contrario, es absolutamente congruente con el objetivo de reconstruir y re-crear el sistema democrático. El miedo a la discrepancia y al debate es propio de las nociones autoritarias de la política. Un concepto avanzado y moderno de democracia más que conceder la posibilidad de la discusión, la incluye como característica intrínseca. Lo que sin duda no puede suceder es que el conflicto sea tratado con criterio acusativo, negándole a la otra parte la racionalidad de su posición en cuanto instancia con personalidad y lógica propias. Y tampoco debe suceder que las discrepancias se oculten con la pretensión de ser resueltas elitariamente, con la idea falsa de que la apariencia de concordancia total fortalece al gobierno y a los partidos en él.

Somos de la opinión que cuando una sociedad sospecha de divergencias y de una pugna sorda al interior de un bloque político y gubernamental, ello resulta más dañino para el sistema que cuando esas divergencias son tratadas adecuadamente a la luz pública.

Por otra parte, la introversión exagerada de los cuerpos políticos conduce con facilidad a la generación de apatía y desconfianza social respecto de ellos. Y las soluciones introvertidas amenazan con más intensidad convertir la relación gobierno/partido en una relación de subordinación de una de las partes, perdiéndose o mermándose con ello las potencialidades complementa-

rias de una o de las dos instancias.

Cabe hacer notar que la conflictividad de la que hablamos se refiere a un tipo de situaciones esporádicas, que se dan en el seno de un conjunto **con sentido y auto-conciencia de ser una unidad.** Ello implica que no pueden haber ánimos ni propósitos destructivos en la contienda. A la inversa, si el conflicto se expresa es porque deviene en un recurso que debe **aportar a la esencialidad dirigente de las fuerzas en el gobierno.**

FORTALECER LA DEMOCRACIA DESDE ADENTRO Y DESDE AFUERA DEL GOBIERNO

Para concluir se impone una última reflexión. Que el socialismo sepa conjugar el espacio político-social que le es propio con su condición de partido en el gobierno, contribuirá notablemente tanto al proceso democratizador como al desarrollo de las políticas del Gobierno de la Concertación.

Constituiría un error de grandes proporciones si la política chilena se desarrollara enfrentando, de un lado, a un bloque gubernamental cerrado -o sea al gobierno y a los partidos que lo componen alineados como simple prolongación del primero-, y de otro lado a una oposición (derechista) con variadas fuentes convergentes en lo sustancial. La derecha no hace ni va a hacer política sólo desde un partido o desde una sola alianza. Pondrá a su haber

todos sus recursos, de manera diferenciada y con apariencias autónomas. Así, su poder y capacidad de presión sobre el gobierno será múltiple. Frente a tal disposición de fuerzas debe existir una contraparte con características similares. El poder empresarial, por ejemplo, no debería encontrar vía libre para presionar directamente a un gobierno **que sólo disponga de apoyos políticos y sociales.** Ese apoyo es necesario, pero no suficiente. Las energías sociales y políticas del progresismo deben ser activas y constituyentes de situaciones de poder. Un sindicalismo fuerte, por ejemplo, es un poder que la derecha ha de sentir y considerar en sus cálculos políticos.

Para que se dé este marco es **imprescindible que los organismos políticos y los cuerpos sociales se desenvuelvan con sus peculiaridades y sus dinámicas.** Una sociedad capaz de expresar su variada riqueza a través de instancias distintas, asienta la democracia en proyección histórica y perfecciona su eficacia. He ahí un universo de acción irrenunciable para el socialismo chileno.

EQUIPO EDITOR

Guaraní Pereda
Oswaldo Puccio
Antonio Cortés
Ernesto Aguila
Andrés Signorelli

SOCIALISMO, TRANSICION Y GOBIERNO DEMOCRATICO

Antonio Cortés T.

UNIDAD SOCIALISTA

Oswaldo Puccio H.

LAS DIFICULTADES ECONOMICAS DE LA TRANSICION

Sergio Arancibia

LO QUE ESTA EN DISPUTA

Guaraní Pereda

¿QUE ES LA MOVILIZACION SOCIAL?

Malva Espinosa C.

¿RETORNO A LOS CUARTELES?

Hugo Espinoza G.

POLITICA Y VIOLENCIA

Antonio Cortés T.

LA RENOVACION

Guaraní Pereda

MARXISMO Y SOCIALISMO: CRISIS Y ACTUALIDAD

Antonio Cortés T.

ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y SOCIALISMO

Manuel Barrera.

AVANCES - 11
EL PROBLEMA DE LA PLURALIDAD
Y LA UNIDAD DE LA IZQUIERDA
EN AMERICA LATINA

KIVA MAIDANIK

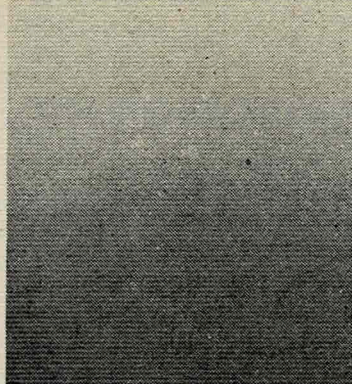
(Polémica de latinoamericanistas soviéticos)

Con frecuencia es posible escuchar fervientes llamados a la reducción de los gastos militares en los países del Tercer Mundo. Se sostiene que esta pesada carga financiera constituye un virtual freno a las posibilidades de superación de la pobreza y estancamiento económico que padecen estas sociedades.

Aún cuando las cifras oficiales disponibles adolecen de innumerables sesgos estadísticos, diversas fuentes internacionales especializadas -el Internacional Institute for Strategie Studies (IISS) de Londres y el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRE) de Suecia- sostienen que de cada 1.000 dólares que produce la región, se destinan en promedio 32,20 de ellos a los militares. Las mismas cifras sugieren que ningún país latinoamericano gasta anualmente menos de 4.000 dólares por cada militar en actividad. En el año 1987, los primeros lugares lo ocupaban Argentina, Venezuela y Chile con aproximadamente 86.000, 32.000 y 18.000 dólares respectivamente como costo fiscal para cada soldado en servicio activo.

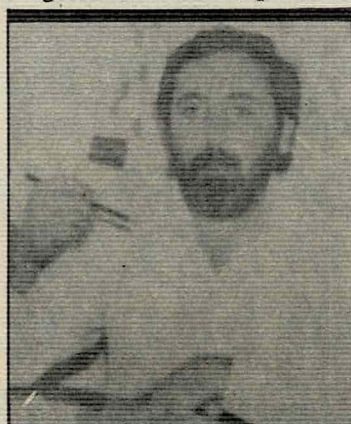
Los actuales niveles sostenidos de armamentismo que se observa en los países de la región, tiene su antecedente de generación en el establecimiento de varios regímenes militares a partir de mediados y fines de la década del 60. Al inicio de ese lustro apenas tres países en toda Latinoamérica continental estaban gobernados abierta o encubiertamente por

ARMAMENTISMO EN AMERICA LATINA



militares. En 1970 lo estaban 10. Tres años más tarde 13, cifra que permanecería constante, salvo un intervalo en Argentina, durante el resto del decenio. Así como la velocidad de propagación y durabilidad del poder militar fue notable, de igual forma ha sido importante la celeridad con que han vuelto a restablecerse gobiernos electos democráticamente.

En su mayoría todos estos gobiernos militares estaban inspirados de una visión de la "seguridad nacional", que abar-



Hugo Espinoza Grimalt,
Sociólogo, Investigador del Centro
AVANCE.

caba virtualmente todos los aspectos de la vida de sus países. Sus hipótesis de conflicto localizaban a los enemigos no al otro lado de las fronteras territoriales, sino del otro lado de las "fronteras ideológicas", cuya manifestación en cada país era la presencia del enemigo interno, contra el cual las FF.AA. se comprometían a luchar por "responsabilidad y legado histórico".

Por esta extensión de los roles militares, las FF.AA., principalmente de América del Sur, adquieren un peso cada vez mayor en la vida social y política de cada uno de sus países. El personal militar creció aceleradamente, hoy en América Latina suman poco más de 1,3 millones. De cada mil adultos en la región, ocho -en promedio- son militares (esto sin contar las numerosas fuerzas paramilitares y las reservas). De los países sudamericanos, Chile, Bolivia y Uruguay muestran las más altas tasas de relación entre militares por cada 1.000 adultos civiles. (12, 11 y 11 respectivamente).

LAS COMPRAS BÉLICAS

En América Latina, el gasto militar y la deuda externa están íntimamente relacionados. Una cuota importante de la actual deuda externa que aflige a los países de la región se remonta a las adquisiciones de armas hechas en la década del 70. En 1986 América Latina pagaba 2.300 millones de dólares nada más que para cubrir los intereses de la deuda

adquirida por las compras de armas.

Perú es el país que más seriamente se ve afectado por sus compras bélicas: estas le significaron, entre 1975 y 1986, poco más de 3.300 millones de dólares, casi un 25% de su deuda externa, que en 1985 era cercana a los 14.000 millones de dólares.

Entre un 15 y un 20% de la deuda internacional de Argentina corresponde a las compras de armamento. Aun cuando no se puede fijar con certeza dichos montos, pues muchas cifras fueron encubiertas por otros gastos fiscales durante los gobiernos militares, algunas estimaciones fijan esas deudas en un rango que va de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Con seguridad se conoce que entre 1975 y 1986, este país compró armas por más de 4.000 millones de dólares (en 1985 su deuda externa sumaba poco más de 48.000 millones de dólares).

El advenimiento de un gobierno democrático en Ar-

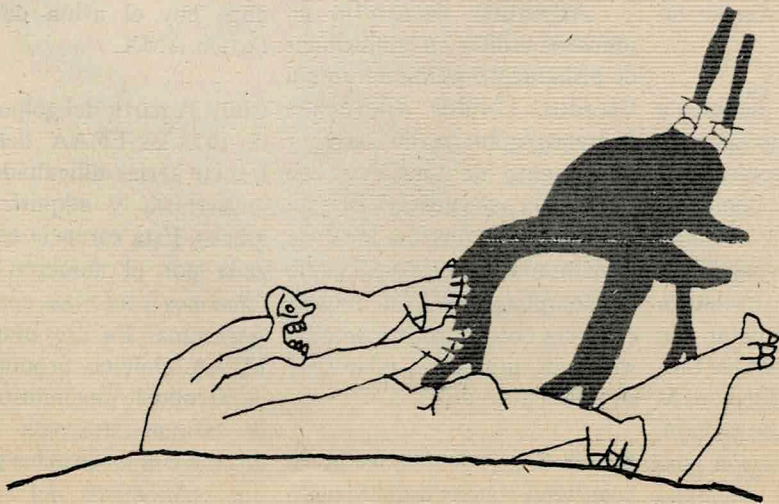
gentina significó una importante reducción en los presupuestos militares. Sin embargo, los compromisos ya habían sido fijados por los propios militares. A partir de 1984 el presidente Alfonsín limitó significativamente los recursos fiscales destinados al rubro castrense. Disminuyó el nivel de compras bélicas así como el propio contingente militar. Según datos del IISS, las importaciones de armas, que en 1981 fueron de 576 millones de dólares se constriñeron a sólo 28 millones de dólares en 1986. En ese mismo período los hombres en armas se redujeron de 185 mil a 78 mil.

Brasil, cuya deuda es la mayor de la región (100.000 millones de dólares), muestra un monto de adquisiciones bélicas comparativamente menor para el período 1976-86: 1.593 millones de dólares. En este país la demanda de material bélico ha empezado a ser cubierto, de manera importante, por su propia producción local, contituyéndose incluso en

una nación exportadora de pertrechos de guerra. Además, los militares han logrado obtener importantes y significativos aumentos en sus remuneraciones, amplios programas de inversiones militares y un presupuesto que en 1988 fue muy superior al destinado a los programas sociales de urgencia.

Aun cuando el gobierno de Chile debe enfrentar un severo boicot a sus importaciones de armas ("enmienda Kennedy" de 1978), este país se ha transformado en el tercer comprador de armamentos de América Latina. Datos proporcionados por la Agencia para el Control del Desarme y Armamento (ACDA) del gobierno norteamericano, señalan que las adquisiciones chilenas de armamento en el exterior alcanzan, entre 1975 y 1987, a los 2.084 millones de dólares.

Sin duda este monto se halla subvaluado porque en Chile, al igual que en Argentina, las compras bélicas se mantienen en la más absoluta reserva y en los últimos años el



gobierno de Santiago privilegió su relación comercial en este campo con Sudáfrica e Israel, países que muestran una escasa transparencia en materia de ventas militares.

LA INDUSTRIA BÉLICA LOCAL: OTRA FORMA DE ARMAMENTISMO

El surgimiento de la producción bélica en países de Sudamérica (Brasil, Argentina y Chile) introduce una nueva fuente de inseguridad en el campo de vinculaciones intraregionales. En la 1ª Conferencia sobre Armamentismo en América Latina efectuada en Lima, en septiembre de 1987, se sostenía que "al convertirse estos países en productores de armas, se ha originado un desequilibrio en la región".

El desarrollo de esta industria local en los últimos años, es una respuesta específica a los problemas de aislamiento internacional de Chile, Argentina y Brasil y demuestra como este hecho influye en la resolución pacífica de las controversias intraregionales.

Argentina. El mayor impulso a su industria bélica fue dado en 1967 con la implementación de un programa de compras, modernización y fabricación de equipos, conocido como "Plan Europa". Por esta iniciativa, bajo un régimen militar, se logró la producción de los tanques ligeros AMX-13, con licencia francesa. Luego, en 1974, se inició la fabricación del

(TAM) mediante un convenio con la firma alemana Thyssen-Henschel.

Este blindado cuenta con sofisticados sistemas de defensa que exigen una mantención onerosa. Un veto del propio gobierno alemán frustró las esperanzas argentinas de exportar este tanque a Malasia e Irán, por lo que su plan de producción debió ser reducido en más de la mitad.

En el plano aéreo, el mejor ejemplo fue la producción del bimotor "Pucará", de uso contrainsurgente, reconocimiento y caza-helicópteros, características aptas para las demandas del Tercer Mundo. Sin embargo, su precio elevado lo hace inalcanzable para los países subdesarrollados (sólo se han producido 105 unidades). La Fuerza Aérea ha concentrado sus esperanzas en el jet de entrenamiento avanzado "Pampa", desarrollado con la colaboración de la empresa alemana Dornier y que ha despertado interés de varios de sus congéneres de la región, incluso de EE.UU.

Argentina desarrolla su industria militar en condiciones de aislamiento político frente a Estados Unidos (derechos humanos/gobierno de Carter) y el aumento de tensiones con Chile en la zona austral. De esta forma, la producción local de armamento ligero y pesado, que se complementa con fuertes compras en el exterior, se convierte en uno de los pilares de su política de defensa.

Brasil. Según la Comisión de Seguridad Nacional del Senado

Federal del Brasil, este país ascendió, ya en 1983, al quinto lugar entre las naciones exportadoras de equipos militares, con una facturación de US\$ 1.500 millones.

En la actualidad, y por un criterio comercial de exportación (bajo precio y tecnología sencilla), existe un número mayor de blindados fabricados por la brasileña ENGESA en el resto de Sudamérica que en las propias FF.AA. del Brasil. Sus mejores clientes en la región son Colombia, Chile y Paraguay y más de 15 países en otros continentes, en los cuales han sido puestos cerca de 3.000 blindados livianos. Por el contrario, el alto costo (2 millones de dólares) de su tanque pesado, el "Osorio" ha limitado seriamente sus posibilidades de exportación y desarrollo de mercados en los países del Tercer Mundo.

El mayor éxito de la aviación brasileña ha sido el "Tucano", 150 de los cuales fueron adquiridos por Gran Bretaña. Junto a Italia coproduce hoy el avión de apoyo táctico AMX.

Chile. A partir del golpe militar de 1973 las FF.AA. deben enfrentar serias dificultades para modernizar y adquirir armamento. Esta carencia es agudizada por el aumento en las tensiones fronterizas con Perú y Argentina. En ese marco, las FF.AA. chilenas promueven el desarrollo de una industria local de armamentos, en contradicción con los propios postulados económicos del régimen,

que señalaban la inexistencia en Chile de ventajas comparativas industriales; por tanto el único camino era la importación de los productos bélicos.

En el ámbito privado, Industrias Cardoen es quien mejor logra enfrentar ese desafío. Con licencia de la firma suiza Mowag inicia la producción de vehículos blindados anfibios "Piraña", destinados inicialmente al Ejército chileno. Luego, y beneficiado por la guerra Iran-Iraq produce bombas "de racimo" para aviación. En la actualidad ha logrado expandir su presencia a varios países sudamericanos y europeos.

De entre las fábricas de las FF.AA. destaca la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER), con su monomotor de entrenamiento "Pillán", que fue exportado a España y Panamá. A fines de 1989 se conoció una investigación española para detectar las causas de varios accidentes que el "Pillán" ha sufrido en cielos ibéricos. Esto expande un manto de inseguridad para el

futuro de la exportaciones aviáticas.

CUATRO CONCLUSIONES

Algunas de las principales conclusiones del desarrollo industrial bélico en países de Sudamérica indican que, en primer lugar, existe un desnivel tecnológico entre estas industrias y la media tecnológica nacional. Este sector más rezagado no se ve beneficiado, ni por "chorreo", por la inversión en la industria bélica. La industria de armas genera pocas demandas sobre la economía global y no tiene otros subproductos que ofrecerle. La mano de obra utilizada es muy especializada y las materias primas se producen parcialmente en forma local.

La producción local de armas es, por regla general, más costosa que la importación de armas similares. Esto ocurre con mayor énfasis en la fabricación de armas pesadas que incorporan componentes de alta tecnología.

En tercer lugar, aun cuando la fabricación bélica local sea una industria altamente rentable y productiva, ella se basa inicialmente en un fuerte gasto militar del propio país.

Por último, en la medida que las actividades de producción bélicas consumen enormes recursos financieros disponibles a nivel local, tal inversión tiene un efecto económico-ideológico que afecta seriamente al conjunto de la actividad productiva nacional. De esta forma, los recursos destinados a desarrollar una industria militar en los países de la región tiende a ocultar los desequilibrios sociales y la desigualdad en la asignación de los escasos recursos nacionales.

En síntesis, el desarrollo de la fabricación bélica en América Latina emerge en condiciones internacionales vinculadas a situaciones políticas de excepción y su implementación reproduce y fortalece las desiguales condiciones socioeconómicas internas que por décadas caracterizan a los países de la región.

